

La educación, el principal déficit de Chile

Las falencias de la educación son el principal déficit al tiempo que el más grave problema de Chile, puesto que, precisamente, de la educación depende la fortaleza cultural de su tejido social, la índole posible de su convivencia y, por cierto, el destino económico de las personas y el país.

Hace ya tiempo los diagnósticos serios en este campo son altamente preocupantes. Ya se sabe, los resultados en las pruebas internacionales realizadas por niños y adolescentes en etapa escolar en el país se comparan muy pobremente con los de otras latitudes. Dentro de este contexto general, también es conocida la marcada desigualdad en la calidad de la oferta educativa existente entre el sector particular privado y aquella que ofrece la red pública nacional. Una profundización en los diversos índices o mediciones accesibles en la materia solo llevan a oscurecer más el escenario. Esa es la realidad, sobre la que ya se ha escrito abundantemente.

Desafortunadamente, las decisiones políticas más determinantes que se han adoptado en la última década en la materia -las del gobierno de Bachelet II- fueron justo en el camino contrario al que las circunstancias requerían. Hoy la patria está pagando el costo de esos profundos yerros. El actual gobierno no lo hace mucho mejor (baste recordar los niños sin posibilidad de matrícula en el sistema público a comienzo del año en curso).

La situación lejos de mejorar, o siquiera mantenerse estancada, empeora sostenidamente. La violencia ideológico-política, otra de naturaleza delictual juvenil, emparentadas con un largo proceso de socavamiento sistemático de la autoridad, parecen conducir inevitablemente a una todavía mayor decadencia al ya alicaído sistema educativo chileno. Lo peor es que las autoridades pertinentes, qué decir el Colegio de Profesores, no parecen estar interesadas en enfrentar el drama educacional presente. La ideología, los intereses grupales, la pequeña política priman inconteniblemente sobre la preocupación -y ocupación- genuina por revertir el triste panorama actual de este ámbito.

Los últimos días han traído dos noticias lamentables, aunque a estas alturas nada sorprendentes, en este campo: por una parte, la inaceptable ocupación de la Universidad de Chile por minorías radicales que se enseñorean en la Casa Central, que impiden la libre asistencia a clases, deciden sobre el ingreso de los profesores y hasta "los marcan" como ha ocurrido en los peores totalitarismos; de otra, el rociamiento con bencina realizado por alumnos al director del Liceo Lastarria. ¿Qué sigue?

Chile necesita urgentemente que sus autoridades y la ciudadanía reaccionen y, cada cual desde su lugar, asuma responsabilidades en la reversión no solo de estas coacciones ilegítimas, sino en la tarea de largo plazo de impulsar una mejora sostenida en la educación chilena.

Elecciones primarias, ¿un problema de convocatoria?

Pamela Figueroa
Instituto de Estudios Avanzados, Usach



El 19 de junio, un 6,19% de las personas habilitadas para votar ejercieron su derecho a elegir las candidaturas que los partidos políticos y pactos presentarán a las elecciones a alcaldes y gobernadores en octubre de 2024. Esto corresponde a 299.966 personas, de un total de 4.844.660.

Más allá de los resultados concretos de quienes ya aseguraron su lugar en la papeleta para esas elecciones, la pregunta es si ¿es esperable un porcentaje mínimo o estándar en este tipo de comicios?

Lo primero a señalar es el origen de la regulación de las elecciones primarias en Chile. La reforma constitucional en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política, regulada en la ley N°20.414 en enero de 2010, dispuso que una ley orgánica establecería una ley de primarias que pudieran utilizar los partidos políticos para la nominación de cargos a elección popular. En diciembre de 2012, la ley N°20.640 estableció el sistema de elecciones primarias para la nominación de candidatos a Presidente de la República, parlamentarios y alcaldes, y que luego se extendió a gobernadores. Esta legislación se dio en el contexto de mejorar los mecanismos de transparencia interna de los partidos y su vínculo con la ciudadanía, en momentos que se acentuaba una crisis de legitimidad y confianza.

Desde esa fecha se han realizado elecciones primarias en cinco ocasiones y la participación ha variado dependiendo del tipo de elección sobre la cual se definirán candidaturas. En el caso de las elecciones presidenciales y parlamentarias, el porcentaje ha sido mayor, bordeando el 20%, lo que se asocia a la relevancia de la selección de candidaturas presidenciales, que tienen un carácter nacional. En el caso de las elecciones de alcaldes y gobernadores, la participación no había superado el 5,53%.

Observemos resultados de participación: a) las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2013 (con un 22,63% de participación), b) en las elecciones de alcaldes de 2016 (con un 5,53% de participación), c) en las elecciones de alcaldes y parlamentarias de 2017 (con un 13,35% de participación), d) en las elecciones de alcaldes (con un 4,37% de participación) y gobernadores de 2020 (con un 2,87% de participación), y e) en las presidenciales de 2021 (con un 21,37% de participación en Chile, y 25,2% de participación en el extranjero).

La participación en las elecciones primarias de alcaldes y gobernadores en 2024 está por sobre los resultados en previas elecciones similares. En esta oportunidad los comicios se desarrollaron en 60 comunas y dos regiones. Quienes podían votar eran los militantes de partidos políticos e independientes en dichas localidades. Este mecanismo ha sido parte de los esfuerzos por hacer más transparente el proceso político buscando mayores consensos y cercanía con la ciudadanía. Es un desafío preservar en el vínculo del sistema de partidos, con las organizaciones de la sociedad y ciudadanas y ciudadanos, no solo para elecciones sino para el fortalecimiento de la democracia en general.

La educación, el principal déficit de Chile

Álvaro Pezoa
Director Centro Ética y Sostenibilidad
Empresarial, ESE Business School
U. de los Andes



Las falencias de la educación son el principal déficit al tiempo que el más grave problema de Chile, puesto que, precisamente, de la educación depende la fortaleza cultural de su tejido social, la índole posible de su convivencia y, por cierto, el destino económico de las personas y el país.

Hace ya tiempo los diagnósticos serios en este campo son altamente preocupantes. Ya se sabe, los resultados en las pruebas internacionales realizadas por niños y adolescentes en etapa escolar en el país se comparan muy pobremente con los de otras latitudes. Dentro de este contexto general, también es conocida la marcada desigualdad en la calidad de la oferta educativa existente entre el sector particular privado y aquella que ofrece la red pública nacional. Una profundización en los diversos índices o mediciones accesibles en la materia solo llevan a oscurecer más el escenario. Esa es la realidad, sobre la que ya se ha escrito abundantemente.

Desafortunadamente, las decisiones políticas más determinantes que se han adoptado en la última década en la materia —las del gobierno de Bachelet II— fueron justo en el camino contrario al que las circunstancias requerían. Hoy la patria está pagando el costo de esos profundos yerros. El actual gobierno no lo hace mucho mejor (baste recordar los niños sin posibilidad de matrícula en el sistema público a comienzo del año en curso).

La situación lejos de mejorar, o siquiera mantenerse estancada, empeora sostenidamente. La violencia ideológico-política, otra de naturaleza delictual juvenil, empentadas con un largo proceso de socavamiento sistemático de la autoridad, parecen conducir inevitablemente a una todavía mayor decadencia al ya alicaído sistema educativo chileno. Lo peor es que las autoridades pertinentes, que decir el Colegio de Profesores, no parecen estar interesadas en enfrentar el drama educacional presente. La ideología, los intereses grupales, la pequeña política priman incontestablemente sobre la preocupación —y ocupación— genuina por revertir el triste panorama actual de este ámbito.

Los últimos días han traído dos noticias lamentables, aunque a estas alturas nada sorprendentes, en este campo: por una parte, la inaceptable ocupación de la Universidad de Chile por minorías radicales que se enseñorean en la Casa Central, que impiden la libre asistencia a clases, deciden sobre el ingreso de los profesores y hasta “los marcan” como ha ocurrido en los peores totalitarismos; de otra, el rociamiento con bencina realizado por alumnos al director del Liceo Lastarria. ¿Qué sigue?

Chile necesita urgentemente que sus autoridades y la ciudadanía reaccionen y, cada cual desde su lugar, asuma responsabilidades en la reversión no solo de estas coacciones ilegítimas, sino en la tarea de largo plazo de impulsar una mejora sostenida en la educación chilena.

LT latercera.com

Declaración de intereses en
www.grupocopesa.cl/declaracion
Impreso en Santiago por Copesa S.A.

Atención a suscriptores
en sucursal virtual:
<http://sucursalvirtual.latercera.com>



SANTIAGO DE CHILE |
AÑO 72

SU OPINIÓN IMPORTA

Envíe sus objeciones al contenido o cobertura del diario a
lector@latercera.com

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1400 caracteres con espacios a:

✉ Email: correo@la.tercera.com
Avenida Apoquindo 4660, Santiago.
La Tercera se reserva el derecho a editar los textos y ajustarlos conforme a sus estándares editoriales, en particular respecto a la exigencia de un lenguaje respetuoso y sin descualificaciones. Las cartas recibidas no serán devueltas.

ESPACIO ABIERTO

Humanidades para unos pocos

Javier Sajuria
Profesor
de Ciencia Política
Queen Mary University



La (mala) polémica iniciada sobre la propuesta de reducir el financiamiento a quienes quieren estudiar humanidades refleja una serie de prejuicios que inundan a nuestras élites. Estos son una mezcla de clasismo con una muy mala comprensión de qué tipo de conocimiento es útil, y para qué.

El desprecio de ciertas disciplinas hacia las humanidades no es nuevo. Hay quienes lo hacen desde una perspectiva científicista, suponiendo que no existen modelos de generación de conocimiento distintos a los que nos ofrece el método científico, mientras que otros miran a las

humanidades como un lujo que no vale la pena financiar. Hay quienes también consideran que entre estas disciplinas se esconde un adoctrinamiento político. En el caso chileno, todas estas afirmaciones están mezcladas con la existencia de una élite con poco bagaje cultural.

Este tema es una discusión constante en otros países, donde el debate se realiza con algo más de evidencia. El 2020, la Academia Británica publicó un reporte donde mostraba el aporte que desarrollaban las escuelas de humanidades en la formación de capacidad crítica y de conocimiento multidisciplinario. Sus hallazgos mostraban que quienes estudiaban estas disciplinas tenían mucha más flexibilidad laboral que quienes estudiaban ciencias, además de poder obtener mejores salarios. El 2023, la misma institución mostraba el tremendo efecto positivo que generaba la investigación en humanidades en las políticas públicas.

En ese mismo sentido, investigaciones recientes en sociología y ciencia política, como las de Elizabeth Simon, han mostrado que las universidades no tienen un efecto visible en las preferencias políticas de los estudiantes. Si bien es cierto que quienes tienen grados universitarios tienden a tener posturas más liberales (sobre todo en disciplinas como las humanidades), esto tiene relación con que quienes toman estas ca-

rreras ya tienen esas preferencias antes de entrar a la universidad. Otro tipo de experiencias vitales, como la discriminación o la formación familiar, tienen mucha más influencia en formar sus posturas ideológicas. Cualquiera que haya pasado últimamente por el desafío de hacer clases en una universidad sabe que los estudiantes no llegan a ellas esperando a que uno los convenga de una postura u otra, mucho menos la de los profesores.

Por último, este debate esconde una mirada clasista sobre el rol de las humanidades. Al proponer quitarles el financiamiento, solo podrán especializarse en ellas quienes puedan pagarlo. Al igual como proponía el economista Thorstein Veblen a principios del siglo XX, pareciera que algunos se sienten atraídos con que haya una clase ociosa, que, gracias a sus privilegios, pueda dedicarse a aquellas actividades más elevadas y menos productivas. Esta es la clase que puede dedicarse a la caza, la filosofía y la política. Mientras que la otra clase, menos privilegiada, debe dedicarse a las llamadas actividades “productivas”, grupo al que seguro algunos incluirían a las ingenierías aplicadas. Esa fijación con el conocimiento aplicado dice más sobre los sesgos de quienes lo proponen que de la verdadera utilidad que tienen las humanidades en la sociedad.